

Contra las reformas del FMI y las cámaras patronales

Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores!

INTRODUCCIÓN

Las elecciones nacionales se producen en un momento de viraje económico, y de transición política. La situación económica ya en los últimos años atraviesa una recesión apenas disimulada, con cierre de empresas, aumento del desempleo, y caída de las inversiones. Las perspectivas para nuestro país se pueden ver en el espejo de los países vecinos, especialmente Brasil y Argentina.

Tras la crisis de 2002 el PBI creció por años por encima de la media histórica, lo cual no significa que se haya producido un desarrollo productivo. El país es más dependiente que nunca: su economía depende totalmente de la exportación de materias primas, y está sujeta por lo tanto a los vaivenes del mercado mundial. La prolongada crisis mundial pareció dejar de lado durante un período a América Latina, que se benefició de los elevados precios de las exportaciones sostenidos en particular por la demanda china. Por otra parte, la región recibió capitales provenientes de los mercados financieros, originados en la búsqueda por parte de los bancos de ganancias extraordinarias -utilizando para ello los subsidios y rescates que dispusieron los Estados para evitar el colapso de los banqueros. Tanto el ingreso de capitales a tasas de interés relativamente bajas, como el boom exportador a precios extraordinarios, son cosa del pasado. Se ha revertido la tendencia, y por lo tanto América Latina va a sufrir cada vez más las consecuencias de la guerra comercial internacional y de las fugas de capitales.

La crisis mundial tiene un carácter específico: es una crisis del régimen capitalista. El estallido de las burbujas especulativas en 2007/2008 ha conducido a una recesión -y a una tendencia a la depresión- de la economía mundial, lo que se puede ver claramente en Japón, Europa y hasta en EE.UU.. El desarrollo de estas burbujas financieras obedece a la dinámica del actual modo de producción, y no se puede evitar con puras medidas de regulación. Su causa profunda es la incapacidad del capital de reproducirse productivamente, es decir, de volcar esas masas de capital a la producción de mercancías, dado que no tendrían salida en los mercados mundiales ya saturados. El capitalismo está en una etapa de decadencia justamente porque produce demasiada riqueza. El armamentismo, las guerras, la especulación financiera, las burbujas especulativas, dan una salida transitoria, pero pronto alcanzan un límite y estalla la ficción de la especulación, provocando aún más privaciones y miseria a la sociedad. Los gobiernos de las principales potencias han destinado cifras siderales para el rescate de los banqueros, de las aseguradoras, de las grandes corporaciones, buscando evitar su caída. Este salvataje ha conducido a su vez a la bancarrota de los Estados, generando un alto déficit fiscal y un endeudamiento que en muchos casos supera el 100% del Producto Nacional Bruto. Los gobiernos capitalistas le pasan luego la factura al pueblo trabajador, impulsando recortes en los gastos sociales, reformas previsionales, rebajas salariales, pérdida de derechos. Los bancos son salvados, pero sus deudores pierden sus viviendas. El dinero que no aparecía para resolver las necesidades del pueblo, aparece sin embargo milagrosamente para salvar a la banca usurera.

La respuesta popular a este saqueo son grandes huelgas, movilizaciones de millones de jóvenes y trabajadores, masivas marchas de ciudadanos "indignados", e incluso rebeliones populares. En todo el mundo se escucha una consigna: "que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores", lo cual se expresa concretamente en las demandas de "no pagar la deuda", "estatizar los bancos", no aumentar la edad de retiro, romper con el FMI y el Banco Mundial, generando incluso la emergencia de partidos políticos nuevos que expresan una ruptura por izquierda con los partidos que defienden el orden capitalista -sean estos de derecha, centro o centro-izquierda. Las demandas de transformación social que colocan esas gigantescas movilizaciones no pueden ser satisfechas por los gobiernos y partidos sometidos a los banqueros: requieren la lucha por un gobierno de trabajadores.

PAUPERIZACIÓN Y MISERIA SOCIAL

Uruguay no se ha recuperado de la crisis de 2002. Aunque crecieron el Producto y las ganancias empresariales, la "recuperación" no alcanzó a toda la población. Según estudios de la Universidad, la mitad de los niños uruguayos sigue en la pobreza. 800 mil asalariados no alcanzan a ganar lo suficiente para cubrir un 25% del costo de la canasta familiar. En particular la juventud sufre los bajos salarios y el trabajo precario. El aumento del salario ha estado por detrás del aumento de la producción. Según el Instituto Cuesta-Duarte del PIT-CNT, la masa salarial alcanzaba en 1998 (es decir, antes de la última gran crisis) el 34% del PBI. Actualmente ronda el 30% del PBI. En contrapartida, las ganancias empresariales significaban en 1998 un 51% del Producto, mientras que en 2010 se acercaban al 60%. La tasa de explotación de los trabajadores pasó por lo tanto de un 151% a un 196%. En los últimos años la evolución del salario fue siempre por debajo del crecimiento del PBI, y ultimamente incluso por debajo del costo de vida.

El balance de sucesivos gobiernos -civiles y militares, de la derecha y la centro-izquierda- es una mayor colonización económica por el capital financiero, un aumento de la deuda externa como consecuencia de los sucesivos salvatajes de

bancos y por la capitalización de los intereses (usura) y una extrema dependencia de la economía respecto a los vaivenes del mercado mundial. América Latina entró de lleno a la crisis mundial, partiendo de niveles de miseria mucho más agudos que los que existían antes de la crisis anterior. Un programa de los trabajadores implica adoptar medidas para que la crisis no la pague el pueblo trabajador, sino que la paguen los capitalistas y banqueros que la provocaron, y que se beneficiaron de la etapa de auge.

Los programas de los partidos que defienden el actual ordenamiento social, fantasean con superar la inseguridad ciudadana y la decadencia educativa, sin modificar el régimen capitalista y por lo tanto sin superar la miseria social. Por más que proclamen buenas intenciones, sus propuestas apuntan a militarizar la sociedad y a privatizar aún más la educación, es decir, van a agravar la situación y no a resolverla.

LA AGENDA DEL FMI Y LAS CÁMARAS PATRONALES

Tanto desde el Fondo Monetario Internacional como desde las cámaras empresariales, se impulsa un programa de ataque a los derechos laborales, previsionales e incluso al derecho a la protesta. Los candidatos y partidos que están disputando el gobierno en octubre están todos sometidos a esta agenda reaccionaria y regresiva.

La protesta patronal frente a la OIT, que es apoyada por los principales partidos de la oposición y ante la cual se adapta y arrodilla el actual gobierno, constituye un ataque al derecho de huelga, a los convenios colectivos y a las conquistas del movimiento obrero. Muestran la preparación de una guerra contra el salario y los derechos del trabajador.

El FMI exige a los gobiernos en todo el mundo el aumento de la edad de retiro y la rebaja del cálculo jubilatorio, de forma que los obreros deban trabajar más años para recibir menos jubilación. Se trata lisa y llanamente de una rebaja del salario. Las políticas del FMI no sólo implican una estafa al trabajador, además conducen a futuros sacrificios aún mayores ya que van a profundizar la recesión en lugar de abrir una salida. Los usureros internacionales conducen a la humanidad entera a un retroceso social y cultural sin precedentes, si la acción de la clase obrera no logra derrotar este ataque a sus derechos.

Es necesario un movimiento obrero independiente de los gobiernos y los partidos del régimen, que vehiculizan la tendencia a descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. El Partido de los Trabajadores defiende la independencia de clase de los sindicatos, que no sólo implica la autonomía frente al Estado sino además la lucha por una sociedad sin explotados ni explotadores, como proclamaron los documentos fundacionales de la CNT.

POR LA UNIDAD DE AMÉRICA LATINA

La existencia de gobiernos proclamados “populares” o “progresistas”, de carácter nacionalista o de centro-izquierda, alentó la expectativa de un proceso de unidad política latinoamericana. El balance de las últimas décadas sin embargo es la incapacidad de estos gobiernos para dar el más mínimo paso en la unidad frente al capital financiero internacional. Estamos ante un proceso de des-integración de América Latina. El Mercosur está en vías de disolución, la Unasur y el ALBA prácticamente no existen. Los gobiernos -tanto de derecha como los que se proclaman “nacionales y populares”- han renunciado a los más elementales aspectos de la soberanía, incluso en el plano jurídico. Prueba de ello son los “Tratados de Protección de Inversiones”, que ceden la jurisdicción a tribunales extranjeros, como el CIADI u otros. Casi todos los países han incluido cláusulas que permiten que las controversias se resuelvan al margen de los tribunales y la legislación de cada país. Otra expresión de sometimiento nacional al imperialismo fue el envío de tropas a Haití (Minustah), defendiendo los intereses de los grandes capitales contra un pueblo hermano.

La incapacidad para afrontar el saqueo de los usureros internacionales en forma conjunta, pese a que muchas de las fuerzas que hoy gobiernan hablaban antes de la necesidad de un «club de deudores», demuestra que estos gobiernos defienden en cada país los intereses de la burguesía y que esta está también interesada en el pago de la deuda pública, porque estas mismas burguesías «nacionales» son partícipes del negocio de la deuda. Los recursos naturales de América Latina -incluyendo el petróleo, el gas, la energía eléctrica, y por supuesto las tierras- están cada vez más en manos de grandes capitales extranjeros. Las venas de América Latina están más abiertas que nunca. Toda la experiencia de las últimas décadas demuestra una vez más la incapacidad bicentenaria de la burguesía para forjar la unidad latinoamericana. La unidad política de América Latina queda enteramente en manos de los obreros y campesinos del continente. Sólo a través de la lucha por gobiernos de trabajadores se podrá avanzar en la recuperación de la soberanía nacional, el control de los recursos naturales, y la plena emancipación nacional a través de la unidad socialista de América Latina.

PROGRAMA DE MEDIDAS URGENTES

1) La deuda eterna y los subsidios al gran capital

El pago de la deuda externa ha significado una profunda entrega de la riqueza generada en el país a la banca

internacional. Esta sangría constante fue priorizada por los gobiernos civiles y militares, “tradicionales” y del Frente Amplio. A pesar de haber pagado peso a peso desde 2005, la deuda no ha hecho más que crecer. Miles de millones de dólares han sido confiscados del bolsillo de los trabajadores. Desde 1970 a 2005 la deuda bruta aumentó de 400 a 13.000 millones de dólares, y desde entonces ha trepado a más de 40.000 millones de dólares. Estamos frente a una deuda claramente usuraria, que aumenta como consecuencia de una constante capitalización de intereses que no se logran pagar.

Para proceder a este saqueo, los gobiernos han sumido a la educación y la salud en el derrumbe total. El déficit fiscal, para pagar la deuda externa y otorgar toda clase de subsidios a la patronales es la causa principal de la inflación que empobrece a los trabajadores. El encarecimiento de las tasas de crédito internacionales y la reversión de los flujos de capitales que recorre toda América Latina, plantean a término una crisis de deuda.

Frente a esta perspectiva, el Partido de los Trabajadores plantea: **No pago de la deuda externa usuraria; la determinación de los responsables de este negociado, con la compensación correspondiente al pueblo saqueado. Ruptura con el FMI.**

2) Salario y desempleo

Asistimos a una epidemia de cierres de empresas y a un pronunciado aumento de la desocupación y la subocupación.

A los cierres de grandes empresas, se le suman decenas de empresas que despiden o envían al seguro de paro, presentándose un promedio de diez empresas por mes a concursos de acreedores. El resultado es la destrucción de más de 50.000 puestos de trabajo en tres años, contándose más de 10.000 en los últimos tres meses, con la industria y la construcción liderando esta sangría. A este saldo debemos sumar las consecuencias del fracaso del FONDES, que conjuga las quiebras de empresas con las denuncias de corrupción.

El gobierno y la oposición patronal son cómplices y garantes de esta orientación: defienden las exoneraciones y subsidios al gran capital, los despidos y cierres de empresas.

La defensa integral del salario y el trabajo requiere levantar como primer medida la lucha por un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar. En lo inmediato, aumento general de salarios con un mínimo de \$ 35.000 (media canasta). Que sean los sindicatos quienes calculen la canasta de productos que cubran las necesidades de las familias trabajadoras, como mecanismo para fijar la demanda del Salario Mínimo Vital y Móvil. Ajuste automático (como mínimo en forma bimensual, o toda vez que la inflación supere el 5% desde el último ajuste) de acuerdo al alza del costo de vida, que deben fiscalizar los sindicatos, para evitar que medidas administrativas del gobierno desnaturalicen los índices de precios al consumo. Eliminación de todos los impuestos al salario y las pasividades, sustituyéndolos por impuestos progresivos al gran capital.

Ante el cierre de empresas y el aumento de desempleo: prohibición de los despidos; reducción de la jornada laboral y reparto de las horas de trabajo entre trabajadores ocupados y desocupados, sin rebaja salarial; ocupación de toda empresa que cierre o despida, estatización y puesta en funcionamiento bajo control obrero. Apertura de los libros contables de las empresas y eliminación del secreto bancario (en todos los casos). La ocupación de toda empresa que amenace con el cierre o el retiro de la plaza, como hicieron los trabajadores de Petrobras, no es sólo un derecho sino un ejemplo para toda la clase obrera, para defender los puestos de trabajo y la posibilidad de un desarrollo productivo al servicio de la sociedad.

3) Previsión Social

El ataque a las jubilaciones y sistemas previsionales forma parte de la agenda internacional del FMI y el capital financiero que reclaman la liquidación de derechos conquistados por décadas de lucha de los trabajadores a nivel mundial. Las reformas previsionales en Argentina, Francia, Brasil y Nicaragua son una muestra de esto.

Los acreedores internacionales exigen el saqueo a los fondos jubilatorios y el aumento de la edad de retiro como garantía de pago de la deuda usuraria y como fuente de subsidios a la burguesía. Las protestas de los llamados “cincuentones” pusieron en cuestión la privatización de los fondos de pensión mediante la AFAP.

El Partido de los Trabajadores convoca a una acción energética de la clase obrera. No al aumento de la edad de retiro. Defendemos los beneficios jubilatorios por insalubridad. Debemos profundizar la lucha por la reestatización de todo el sistema previsional, bajo control de los trabajadores. Eliminación de las AFAP. Restablecimiento de los derechos jubilatorios arrebatados por la reforma de 1995 (cálculo de la jubilación inicial) en forma inmediata, estableciendo como objetivo llevar la jubilación inicial al 82% del último sueldo en actividad.

Jubilación mínima equivalente al 50% del costo de la canasta familiar (hoy, \$ 35.000). Eliminación de las exoneraciones de aportes patronales; aumento del aporte patronal para garantizar el financiamiento del BPS. Las jubilaciones y pensiones son un salario diferido, propiedad de los trabajadores, y debe ser administrado exclusivamente por representantes de trabajadores y jubilados. Abajo todas las jubilaciones de privilegio, civiles y militares. Pérdida de los derechos jubilatorios para los responsables de crímenes y torturas durante la dictadura militar.

4) Industrialización y medio ambiente ¡Fuera UPM2 y su tren!

En estos últimos años han proliferado los denominados mega emprendimientos, bajo el aval de todos los partidos con representación parlamentaria: las grandes plantas de celulosa como Botnia-UPM, Montes del Plata y ahora UPM2. Todos ellos comparten un denominador común: están al servicio de la extracción de los recursos naturales de nuestro país para incrementar la ganancia de las grandes empresas multinacionales.

Las plantas de celulosa, además de ser altamente contaminantes, están exoneradas de todo tipo de impuestos, inclusive a la exportación. Estos mega emprendimientos no suscitan ningún proceso de valor agregado a esas materias primas, es decir no implican ningún tipo de desarrollo de la industria nacional. Por el contrario, dan mayor impulso a las plantaciones forestales, también subsidiadas por el Estado, favoreciendo el desempleo y la desindustrialización. Además, este saqueo de nuestros recursos implica un alto costo en materia de medio ambiente, cuyas primeras consecuencias se han comenzado a manifestar en la contaminación de los ríos. Todo esto manifiesta que, en la presente etapa del capitalismo, la burguesía es incapaz de desenvolver ningún proceso industrializador. Ésta pasa a ser una tarea de clase obrera.

Estos años han sido también, el del despegue y posterior estancamiento de la acumulación capitalista en el campo, basado en la producción y exportación de soja, carne y madera en manos de unos pocos grandes capitales internacionales, con el desplazamiento de miles de pequeños productores y basado en la superexplotación de los obreros rurales.

El resultado de todo este proceso ha sido la profundización del carácter semi-colonial de la economía nacional. Un ejemplo son los Tratados de protección a las multinacionales, y el contrato colonial con UPM.

Frente a esta realidad desenvolvemos una orientación socialista, que presupone el desenvolvimiento potencial de todas las fuerzas productivas sociales. Planteamos la defensa de nuestros recursos naturales, la estatización bajo dirección de los trabajadores y las organizaciones populares de todos los emprendimientos ya instalados en nuestro país, bajo procedimientos que reduzcan y eliminen la contaminación con un plan acorde para la industrialización de esas materias primas. ¡No a UPM2!. Por un plan de industrialización al servicio del pueblo laborioso.

Un plan de esta naturaleza no puede constituir un planteo aislado. Impulsamos la nacionalización de los monopolios capitalistas, bajo la dirección de los trabajadores, en especial los bancos, el comercio exterior y la gran propiedad agraria. La enorme concentración y extranjerización de la tierra deja planteada la expropiación y socialización de la propiedad en el agro, como vía para desenvolver todas las fuerzas productivas del medio rural.

Los monopolios capitalistas son una expresión del agotamiento relativo del desarrollo capitalista ('libre competencia'), y un método de expropiación económica, por parte del capital monopolizado, contra otros sectores capitalistas o semi-capitalistas más débiles y contra los trabajadores. Una política de nacionalizaciones así entendida, debe ser preparada metódicamente por medio de la apertura de los libros de las grandes empresas y el establecimiento del control de los trabajadores.

6) El movimiento de la mujer

La lucha de las mujeres crece año a año en todo el mundo. Las mujeres han tomado las calles por sus reivindicaciones y sobre todo en defensa de la vida de miles que son violentadas, mutiladas y asesinadas producto de la violencia de género como de los abortos clandestinos. El 8 de Marzo el mundo fue sacudido por un paro internacional de mujeres, dotando a la jornada por las reivindicaciones y los derechos femeninos un carácter de lucha con el método de la huelga general.

Es el Estado y el régimen social el responsable de la violencia y opresión de las mujeres, y por lo tanto nuestra lucha debe ser orientada a superarlos.

La crisis en curso plantea una agudización de la pauperización y la violencia de la cuales son víctimas las trabajadoras que constituyen el eslabón más débil de la cadena de explotación, y ya se expresa la tendencia a la desocupación, la marginación y la pobreza de miles de mujeres. El problema de la prostitución y la trata de mujeres y niñas golpea con más fuerza en los barrios pobres todo el país.

Para combatir el femicidio planteamos: casas refugio y organismos judiciales autónomos controlados por organizaciones independientes de las mujeres. Por trabajo genuino con salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar. Mayor presupuesto en salud, educación y vivienda; para garantizar un sistema de salud que cubra las necesidades de la clase trabajadora, educación sexual científica y jardines maternos en los lugares de trabajo y de estudio. Aborto sin; plazos arbitrarios ni objeción de conciencia que lo obstaculice.

7) Juventud, trabajo y educación

Los jóvenes representan uno de los eslabones más golpeados por el sistema capitalista y por los gobiernos que han conducido históricamente nuestro país, sin excepciones. Todos los aspectos que hacen a la vida y el desarrollo humano de la juventud son violentados, por ejemplo, la educación, la vivienda y el derecho al trabajo (y al trabajo digno) como

elementos básicos esenciales.

Impulsamos la movilización por la eliminación de los contratos basura, contra la flexibilización laboral y la polivalencia, respeto a la antigüedad laboral. Eliminación de las tercerizaciones en todo el Estado, pasando los trabajadores a calidad de trabajadores permanentes y bajo las condiciones de los convenios colectivos de la rama correspondiente. Contra los contratos precarios para los jóvenes (Becarios y Pasantes): a igual tarea, igual salario y condiciones de trabajo. Defensa de los convenios colectivos y el principio de ultraactividad (las conquistas se mantienen aunque venza el convenio). Defensa del derecho de huelga, incluyendo el derecho a la ocupación (de empresas privadas o públicas).

Se plantea la amenaza de reducciones al ya menguado presupuesto educativo. Las perspectivas mercantilizadoras y privatizadoras sobre la educación pública son las que predominan en todos los niveles educativos, producto del ahogo presupuestal a la que se encuentra sometida.

El Partido de los Trabajadores se compromete en la defensa de la educación pública, en su democratización para que todos los jóvenes puedan acceder y permanecer en las aulas, pero además defiende una perspectiva educativa al servicio de los trabajadores y el pueblo explotado. Basta de subsidiar a la educación privada, por una educación pública de calidad.

8) Seguridad y Represión

Frente al aumento de la pauperización social, las perspectivas de ajuste y de guerra de las patronales y el Estado contra las condiciones de vida de la clase trabajadora se prepara por parte de todos los partidos un aumento de la represión y el recorte de las libertades democráticas.

La política de impunidad a los militares de la dictadura, el reforzamiento del aparato represivo, la militarización y nacionalización de la guardia republicana, los convenios internacionales con el Departamento de Estado de EE.UU, el mayor equipamiento de las fuerzas represivas, con programas de espionaje y un aumento fenomenal del presupuesto en 'seguridad' son parte del programa que se ha puesto en práctica y que lejos de garantizar la seguridad de los trabajadores la ha agudizado otorgándole libre accionar a la policía a partir de razzias, gatillo fácil y megaoperativos. La tendencia de los principales partidos y candidatos es reforzar esta política.

El planteo de sacar nuevamente los militares a patrullar las calles, es un planteo reaccionario que busca instalar en la población la aceptación de que las fuerzas represivas y el Ejército son protectoras de la seguridad ciudadana, y que prepara las condiciones represivas contra la protesta social.

Desde el Partido de los Trabajadores impulsamos la organización contra los atropellos policiales; para darle un golpe al narcotráfico y las redes de trata hay que terminar con el secreto comercial y bancario, para combatir el lavado del dinero del crimen organizado. De fondo, la salida exige acabar con el aparato represivo y su reemplazo por organizaciones populares que tomen el control de la seguridad de los trabajadores y la juventud.

9) Derechos Humanos e Impunidad

El entramado de la impunidad sigue en pie. El aparato represivo ha quedado intacto desde el Pacto del club Naval y la Ley de Caducidad, manteniendo en ejercicio a los militares responsables de los crímenes de la dictadura. Esto no es modificado con la reciente aprobación de la Ley Orgánica Militar. Cuando la dictadura militar se vio forzada a retirarse, el conjunto del régimen político que lo sucedió se puso de acuerdo en garantizar la continuidad de los mandos militares responsables del golpe de Estado y los crímenes de lesa humanidad. Las escasas condenas y prisiones de represores, obedecieron no a una acción desde el Estado sino a la persistencia de las víctimas y familiares de desaparecidos, y a las organizaciones de derechos humanos que enfrentaron la impunidad. Desde los gobiernos se ha garantizado el pacto de impunidad, que sigue en pie.

Planteamos: Verdad, Juicio y Castigo. Apertura pública de todos los archivos de la dictadura. Cárcel efectiva y común a los genocidas. Abajo el pacto del Club Naval y el pacto de silencio. Reparación integral a las víctimas de la represión, y pérdida de haberes jubilatorios para los represores involucrados en violaciones a los derechos humanos.

Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores